Los derechos humanos al agua y al saneamiento han dejado de ser ya una discusión, y se constituyen en uno de los derechos fundamentales para la vida y la salud de las personas sobre todo de las poblaciones más vulnerables.

Las políticas públicas respecto de la dotación de servicios de agua y saneamiento y en particular de las zonas rurales, requiere del concurso de varios actores tanto a nivel intersectorial Ministerios de Salud, Obras Publicas o Vivienda, Educación, y otros en donde se pueda realizar una política efectiva e inclusiva. Estas articulaciones deben ser inexorablemente también entendidas en los diferentes niveles de gobierno regional, distrital, local, comunidad, familia e individuo.

Los diferentes niveles de actores y de Gobierno debe hacer una política pública institucionalizada, existen diferencias entre la participación y roles de los actores proveedores de los servicios y la participación de las comunidades, las familias y las personas.

Desde la generación de la política pública existen dos retos importantes el primero es basarse en evidencia de calidad respecto de las diferentes acciones estratégicas que comprenden la política, y en América Latina sin duda es una tarea aun difícil no solo por la falta de información sino por la poca evidencia de modelos escalares o de gran envergadura, que por los niveles de cobertura y de baja calidad de los servicios es un tema ineludible, no se puede seguir apostando por experiencia piloto o pequeñas inversiones para un problema de esta envergadura, el segundo reto es la participación efectiva de los propios usuarios, por lo general las poblaciones vulnerables no son conscientes de la importancia de contar con servicios de calidad y por ello su sentimiento de valorización respecto de los servicios es muy bajo, otro factor de importancia es la poca correlación que encuentran en las familias e individuos más vulnerables entre agua y saneamiento y la salud de sus propias familias.

Por ello toda política pública de dotación de servicios de agua y saneamiento para poblaciones menos favorecidas debe incluir la participación de los beneficiarios en el diseño de la propia política, respecto de este tema en particular si hay elementos que corresponden a los creadores de la política como el marco normativo, las herramientas de operacionales, las alternativas técnicas y las inversiones, pero las mismas deben estar basadas en la realidad concreta de los usuarios finales de los servicios.

Dado que toda política de agua y saneamiento tiene sus pilares en la calidad y la sostenibilidad la participación de los usuarios es clave, ya hoy en día las cifras de cobertura de los servicios carecen de valor si es que estos no pueden proporcionar calidad y sostenibilidad de las inversiones, y en este sentido la participación ciudadana es clave para poder lograr este objetivo.

Los procesos de real inclusión en Agua y Saneamiento rurales y poblaciones rurales pasan entre otros aspectos por: (i) focalizar adecuadamente a la población a atender, y esto debe ser consecuencia del análisis de por lo menos dos variables los niveles de pobreza, y los niveles de enfermedad, si bien la mayor contribución de los sistemas de agua y saneamiento apuntan a mejorar los índices de desnutrición, el indicador clave son las enfermedades diarreicas agudas EDA´s que si tienen una correlación lineal con la provisión del servicio y representan un 30% de contribución a la disminución de la desnutrición crónica infantil y además del importante ahorro de costos en la atención primaria de la salud, (ii) La inclusión real exige igualdad de oportunidades y esto significa en la medida de lo posible dotar de servicios de calidad del agua, pero también de conexiones intradomiciliarias que permitan apropiados hábitos de higiene en las familias tanto en el el aseo personal como en la preparación de alimentos, aun en muchos países de la región este concepto no está normado, ni considerado en las intervenciones, haciendo de los más vulnerables, ciudadanos de segunda categoría, y evitando que las familias puedan mejorar en plazos más cortos su salud.

La participación de las comunidades, familias e individuos deben ser considerados desde la selección técnica del sistema de potabilización y de saneamiento a utilizar, más siendo realistas este ejercicio de ciudadanía debe ser asistido, los niveles de escolaridad en las poblaciones rurales y vulnerables en Latinoamérica es muy bajo, por tanto esta asistencia podrá primero apoyar a decidir qué sistema elegir y cuáles son los costos de operación y mantenimiento del mismo, lo que permite generar conciencia desde un inicio de las responsabilidades que genera en las familias la elección de la solución tecnológica, sobre todo en los costos de su manutención y sostenibilidad, en la organización requerida para el mantenimiento entre otros.

Un segundo estadio de la participación de las familias se encuentra en su real y efectiva participación en los elementos sociales de educación respecto del adecuado uso de los servicios, hoy en día no se puede considerar una dotación de servicios sin considerar un fuerte componente social que permita cambiar los hábitos de higiene en las personas, la evidencia demuestra que per se la dotación solo de la infraestructura terminaría siendo irremediablemente un costo hundido, aquí la participación de las familias e individuos es de suma importancia, ya que es un compromiso con el cambio, y con la mejora de la salud de la comunidad. Este elemento debe estar presente antes, durante y después de las intervenciones de infraestructura destinadas a dotar de servicios a la población

Un tercer estadio está relacionado con la participación de la población en los modelos de gestión de la operación y mantenimiento, y en la corresponsabilidad de sufragar los costos de los mismos, sino la sostenibilidad seria inviable, y los estados no pueden subvencionar estos, su participación debe estar en el apoyo técnico, también la evidencia demuestra que a medida que los beneficiarios aportan por la calidad y sostenibilidad de sus servicios, estos se hacen más sostenibles, esto involucra crear modelos de gestión en los diferentes niveles de gobierno como parte de la política pública, siempre orientados a la calidad y a la sostenibilidad de las inversiones.

A pesar que muchos piensan que la solución es crear iniciativas desde las propias comunidades como la mejor forma de participación, es claro que parte del retraso en la ampliación de una real cobertura inclusiva, con calidad y sostenible, es el pensar en el problema con la solución de una comunidad en lugar de una política nacional, por ello la participación es de suma importancia pero no como el eje por lo cual una comunidad presionara para ser atendida sino como participa de una política nacional, ya se mencionaron tres primeros estadios.

Finalmente las políticas públicas deben poner especial atención en el monitoreo de la calidad y como esta información fluya no solo en los tomadores de decisión sino principalmente en las comunidades y las familias para que ellas puedan exigir la calidad de los servicios respecto de la calidad del agua (potabilización), continuidad, y asistencia técnica, que es la forma en que realmente la población no solo ejerce un derecho, sino tiene la oportunidad de una participación real en la mejora de los servicios públicos de agua y saneamiento, y por ende en el ejercicio de sus derechos, mas aun cuando están pagando por el servicio, sino cuando realmente tomen conciencia que es un servicio que requiere de calidad para que sea efectivo.

........